



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D.C., julio quince de dos mil veinte (2020)

---

**Referencia: 110014003010-2020-00046-01**

**Acción :** TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

**A quo:** JUZGADO 39 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

**Derecho(s) :** PETICION

**Accionante (s):** HEBERTH AUGUSTO PULIDO GUTIERREZ

**Accionado (s):** ACCION S.A.S.

Se resuelve mediante esta decisión la Impugnación presentada al fallo proferido en primera instancia por el Juzgado 39 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Una vez avocado el conocimiento de la solicitud de amparo constitucional, dispuso la admisión de la solicitud de amparo mediante auto del 5 de junio de 2020, ordenando el enteramiento a la accionada, a fin de que se pronunciara sobre cada uno de los hechos que motivaron la acción constitucional; profiriendo fallo el 9 de junio de 2020 negando la tutela por hecho superado, el cual es materia de análisis por este estrado judicial en sede de impugnación interpuesta por la parte accionante.

### **I. ANTECEDENTES.**

En síntesis el accionante expone que formuló derecho de petición a la accionada el día 28 de febrero del año 2020, sin que se le diera contestación clara, completa, concreta y de fondo a la petición.

La accionada contestó manifestando que cumplió con el requerimiento de la petición, al realizar dos respuestas parciales en las fechas 17 de abril y 20 de mayo de 2020, e igualmente realizó la entrega de los documentos requeridos, esto es, contrato de trabajo inicio labores el 1 de agosto de 2008. contrato de trabajo inicio de labores 19 de septiembre de 2009, exámenes de ingreso de los contratos precitados. Terminación de contrato notificado el 16 de marzo de 2011. Así mismo, la accionada, manifestó no tener más soportes respecto de la documentación solicitada razón por la cual no podía brindar la información por no tenerla.

### **II. LA DECISIÓN DEL A - QUO.**

Luego de hacer el recuento de la solicitud de amparo y de elevar las consideraciones con que fundamentó su decisión, el Juez de la instancia mediante

fallo del 9 de JUNIO de 2020, resuelve negar el amparo constitucional por considerar que se presenta hecho superado.

El accionante no cumplió con el requerimiento del A quo, no aportó el poder para adelantar la acción constitucional.

### **III. DE LA IMPUGNACIÓN.**

Inconforme con la decisión proferida por el A-quo, el accionante considera que no se produjo una respuesta completa y a fondo, en cuanto a indicar en qué fundaba la reserva legal y no determinar para cuando tendría los soportes que en la actualidad no poseía, además de no responder el punto 11.

### **IV. CONSIDERACIONES.**

En primer lugar, ha de partir esta instancia por admitir su competencia para conocer y decidir sobre la presente impugnación de conformidad con la prescripción del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del ejercicio de la acción de tutela. Por su parte el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 niega esta vía extraordinaria de protección, entre otros casos, "Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla (la acción de tutela) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante".

Prudente es reiterar que el procedimiento constitucional de carácter residual, autónomo, directo y sumario, sólo por excepción puede sustituir los procedimientos judiciales ordinarios establecidos por el Legislador, por lo que no puede considerarse como un mecanismo judicial de carácter alternativo, claro está, sin desconocer su viabilidad en casos excepcionales para garantizar los derechos fundamentales de las personas preservando su dignidad y su autonomía; y así, no sean objeto de amenazas o de violación por parte de las autoridades públicas, o de particulares sin que implique, se repite, que el juez constitucional pueda desplazar con su actividad a los jueces ordinarios o invadir su esfera de competencia.

El artículo 13 de nuestra Constitución preceptúa que: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se considera que, la discriminación se reflejaría en el trato dado a determinada persona, y desequilibrado en cuanto a libertades y oportunidades respecto de las demás.

Debe tenerse en cuenta que la acción se dirige en contra de PARTICULARES, por lo tanto y como lo ha expuesto la Corte Constitucional en varios fallos entre otros en la Tutela 534 de 24 de noviembre de 1994:

“...Para que la tutela proceda contra particulares es necesario que se ubique dentro de uno de los tres eventos señalados en la parte final del artículo 86 de la Carta Política: i). Si el particular está encargado de la prestación de un servicio público; ii). Si la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; iii). Si el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión...”

En otra oportunidad, la misma Corporación sobre el particular puntualizó lo siguiente:

“La Corte Ha admitido, de manera excepcional, que el derecho de petición vincula a los particulares. La procedencia de la tutela para exigir al particular que atienda una petición se sujeta a los requisitos contemplados en el artículo 86 de la Carta, esto es: que el particular preste un servicio público o que realice una actividad de interés general y, además, que la negativa a contestar la petición vulnere derechos fundamentales. Así, se ha concedido la tutela por violación al Derecho de Petición cuando la entidad financiera no suministre información que permita rectificar información remitida a la central de riesgos del sistema financiero, impidiéndose ejercer el habeas data; cuando la entidad financiera no entrega información relativa al cumplimiento o al estado de sus obligaciones crediticias, colocando en entredicho la honorabilidad, dignidad y buen nombre de las personas (...)” (T-311 de 1999).

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional consiste en la facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución regulado por la ley 1755 de 2015.

El precepto transcrito consagra pues, el denominado genéricamente DERECHO DE PETICIÓN, que por estar contenido en el capítulo I del título II de la Carta Magna, titulado “DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”, determina tal rango jerarquía al mismo y por ende de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991, es susceptible de amparo por esta vía, dado claro está, en el presupuesto previo de la procedencia de la acción.

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución...”

*Este derecho no implica que la resolución a darse sea favorable a lo solicitado, la obligación que le asiste a la Administración es dar una pronta resolución, para ello el legislador ha establecido unos términos en los cuales debe darse respuesta, y en el caso de resolver un derecho de petición el término solo es de quince días.*

La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.

La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, *i)* respetando el término previsto para tal efecto; *ii)* de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; *iii)* en forma congruente frente

a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado:

*"Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna<sup>1</sup> a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.*

*El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta<sup>2</sup>. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental<sup>3</sup>."*

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados; pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ha sido superada, la decisión que dicte no tiene ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión del acusado.

De lo narrado en tutela, de las pruebas aportadas consistentes en la remisión de cuatro correos electrónicos los días 20 de mayo, dos el 17 de abril y el 5 de junio del año 2020, donde se hace constar las respuestas emitidas al derecho de petición, también es cierto que, en el enviado el 20 de mayo no hay respuesta efectiva, sino un informe de no contar con los soportes y que a futuro se le enviarían cuando su proveedor IRON MOUNTAIN estableciera la posibilidad de acceder a los mismo; sin embargo, en la respuesta del 17 de abril se indicó la misma circunstancia pero se informó que la respuesta a los mismos se daría para el 15 de mayo del cursante año, además se manifestó que respecto de los numerales segundo, tercero y cuarto del derecho de petición, son documentos del comerciante los cuales tienen reserva legal de acuerdo con el art. 61 del C. de Co., allegando jurisprudencia sobre el tema, razón por la cual haciendo acopio de la preceptiva legal y jurisprudencial, por la restricción se le informó que existía un impedimento para allegarle al peticionario los precitados documentos.

Si bien es cierto, en las misivas se realizaron respuestas parciales, también lo es que con las probanzas allegadas a la tutela consistentes en documentos y/o soportes (virtuales) se determina del contenido de los mismos que se cumplió con

la respuesta completa y de fondo, en primer lugar de la restricción legal que es uno de los puntos aludidos en el recurso, y en cuanto a lo solicitado en el ordinal 11 del derecho de petición también se cumplió por la accionada con la allegación de la respuesta, si en cuenta se tiene que los soportes adosados a la tutela hacen mención al record o comprobantes donde se individualizan los ítems: sueldo, horas, horas extras festiva, diurna, auxilio educativo, bonificación mera liberalidad, aporte de salud, aporte de pensión, desc servicio fem cliente entre otros, años 2008, 2009, 1010, 2011 certificación laboral etc.

En conclusión, no hay duda que el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse, ya que la accionada logró demostrar el cumplimiento al derecho de petición con la documental adosada a la acción de tutela y tal como lo determinó el a-quo se configuró el hecho superado.

Con todo, la decisión del juzgador de primera instancia se ajusta a la legalidad, razón por la cual procede confirmarla.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

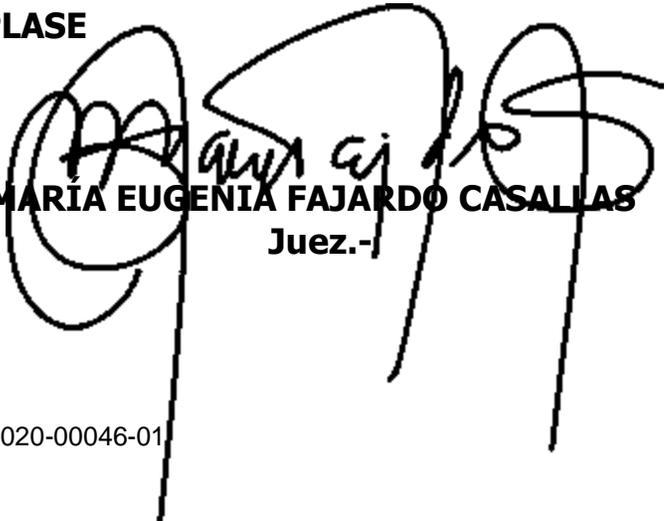
#### **V. RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el fallo de fecha 9 de junio de 2020, proferido por el Juzgado 39 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, dentro de la acción de la referencia, en consecuencia.

**SEGUNDO:** Procédase a NOTIFICAR esta decisión a los interesados, por el medio más expedito, inclusive al A Quo. (Art. 30 Decreto 2591 de 1.991)

**TERCERO: REMITIR** el presente fallo a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal respectivo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MARÍA EUGENIA FAJARDO CASALLAS**  
Juez.-